

Eficacia de las sanciones disciplinarias impuestas entre los años 2014 y 2018 por la Personería
Distrital de Bogotá a los Alcaldes Locales que actuaron dentro de procesos licitatorios

María Fernanda Correa Hernández

Universidad Nacional Abierta y A Distancia - UNAD

Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas

Especialización en Gestión Pública

Bogotá

2019

Eficacia de las sanciones disciplinarias impuestas entre los años 2014 y 2018 por la Personería
Distrital de Bogotá a los Alcaldes Locales que actuaron dentro de procesos licitatorios

Monografía para optar título Especialista en Gestión Pública

María Fernanda Correa Hernández

Directora

Dra. Lady Andrea Suárez Carvajal

Mg. Abogada

Universidad Nacional Abierta y A Distancia - UNAD

Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas

Especialización en Gestión Pública

Bogotá

2019

DEDICATORIA

Este trabajo lo dedico a mi Padre Celestial y Salvador Jesucristo, a mi amado esposo David Guillermo Pérez Gómez, a Santiago, Sofía y Gabriel Pérez, a mis padres Luis Fernando Correa Parra (Q.E.P.D) y Nhora María Hernández de Correa, quienes estuvieron a mi lado llenando mi vida de alegrías y motivos para esforzarme en cada proyecto emprendido.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios Todo Poderoso, a mi Salvador Jesucristo y a mi familia que con su comprensión, tiempo, dedicación y amor me acompañaron en este proceso y me impulsaron a no rendirme.

A la docente Lady Andrea Suárez Carvajal por los conocimientos transmitidos, por su paciencia y perseverancia y a todos los docentes que hicieron parte de este proceso, quienes contribuyeron a que este logro se hiciera realidad.

RESUMEN

Con este trabajo se pretende determinar si las sanciones establecidas en el Código Único Disciplinario, Ley 734 de 2002¹, que fueron impuestas por la Personería Distrital de Bogotá a los Alcaldes Locales de Bogotá que actuaron dentro de procesos licitatorios entre los años 2014 y 2018 contribuyeron a reducir las falencias presentadas, o si por el contrario las conductas de los aludidos funcionarios fueron reiteradas y proliferadas, lo que indubitadamente no solo habría menguado las disposiciones y principios contractuales establecidos en la Ley 80 de 1993² y la Ley 1150 de 2007³, sino que además cuestionaría si las sanciones disciplinarias que actualmente contempla el Código Único Disciplinario son suficientes o deben ser reevaluadas, todo ello teniendo en cuenta que los gobernados confían en la sindéresis de los órganos de control, en este caso de la Personería Distrital de Bogotá, para evitar que factores exógenos cercenen los intereses colectivos que son los que precisamente deben prevalecer en un estado Social de Derecho.

¹ Art. 44 de la Ley 734 de 2002. “Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones: 1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima. 2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas. 3. Suspensión, para las faltas graves culposas. 4. Multa, para las faltas leves dolosas. 5. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas”.

² Art. 23 de la Ley 80 de 1993. “de los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.”

³ Art. 2 de la Ley 1150 de 2007. “De las modalidades de selección.”

⁴ Art. 82 de la Ley 1474 de 2011. “Disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación estatal.”

ABSTRACT

This document wants to determinate if the penalties given for Codigo Unico Disciplinario, Law 734 from 2002, that The Personeria Distrital de Bogota punished the local officials of Bogotá. By looking into the tender process developments from 2014 to 2018, I will examine if the punishment helped to reduce the offenses, or on the contrary, if the behaviors by these public workers were reiterated and proliferated. In this case, The Law 80 from 1993, The Law 1150 from 2007 and The Law 1474 from 2011 dispositions and the legal principle was broken. In addition, the different disciplinary punishment given by the Codigo Unico Disciplinario is adequate, or if this disciplinary punishment should be reviewed. The citizens trust in honest institutions and their correct decisions, in this case, La Personeria Distrital of Bogota to avoid different external factors that will break the collective interests that it has to live on in the social rule of law.

PALABRAS CLAVES

Sanción disciplinaria, eficacia, proceso disciplinario, principios de la contratación estatal, licitación pública.

KEYWORDS

Disciplinary sanction, effectiveness, disciplinary process, principles of state contracting, public tender.

TABLA DE CONTENIDO

Resumen.....	5
Abstract.....	6
Palabras claves.....	7
Keywords.....	8
Lista de Tablas.....	11
Lista de Figuras.....	12
Lista de Anexos.....	13
1. Introducción.....	14-16
2. Planteamiento del problema.....	17-18
3. Justificación.....	19
4. Objetivos	
4.1 Objetivo General.....	20
4.2 Objetivos Específicos.....	20
5. Marco Jurídico.....	21-22
6. Marco conceptual y teórico.....	23
6.1 CAPITULO I – La Función Pública y la Función Administrativa	
6.1.1 Definición de la Función Administrativa y la Función Pública.....	23-24
6.1.2 Principios de la Función Administrativa	24-26
6.1.3 Funciones de los Alcaldes Locales.....	26-27
6.1.4 Generalidades del Derecho Disciplinario.....	28-29
6.1.5 La Personería de Bogotá.....	29-30

6.1.6. Procesos disciplinarios adelantados por la Personería Distrital de Bogotá entre los años 2014 y 2018 en contra de Alcaldes Locales que actuaron en procesos licitatorios.....	30-32
6.2 CAPITULO II – Contratación Estatal y sanciones disciplinarias	
6.2.1 Etapas y principios de la contratación estatal.....	35-35
6.2.2 La licitación Pública.....	35-36
6.2.3 Cantidad de procesos disciplinarios adelantados en contra de Alcaldes Locales por la Personería de Bogotá que culminaron con fallos sancionatorios entre los años 2014 y 2018 por falencias en los procesos licitatorios.....	36-37
6.3 CAPITULO III – Responsabilidad disciplinaria y sanciones	
6.3.1 Responsabilidad disciplinaria de los funcionarios y servidores públicos.....	37-38
6.3.2 Clasificación de las faltas	38-40
6.3.3 Sanciones Disciplinarias.....	40
6.3.4 Reincidencia por parte de los Alcaldes Locales de Bogotá en las conductas investigadas por la Personería de Bogotá entre los años 2014 y 2018 con ocasión de las falencias presentadas en procesos licitatorios.....	40-43
7. Conclusiones.....	44-46
8. Referencias bibliográficas.....	47-48
9. Anexos.....	49-50

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Cantidad de procesos licitatorios adelantados.....	31
Tabla 2. Cantidad de procesos disciplinarios.....	31
Tabla 3. Cantidad de procesos disciplinarios con sanción.....	36
Tabla 4. Cantidad de sanciones por localidad.....	41
Tabla 5. Indicador por localidad	42

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Proyección de investigaciones adelantadas entre los años 2014 y 2018.....	32
Figura 2. Cantidad de procesos disciplinarios adelantados.....	37
Figura 3. Cantidad de sanciones por localidad.....	41
Figura 4. Indicador por localidad de procesos licitatorios celebrados y la cantidad de sanciones impuestas entre los años 2014 y 2018.....	43

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Respuesta al derecho de petición elevado a la Personería de Bogotá para obtener los datos citados en este trabajo.....	46-47
--	-------

1. INTRODUCCIÓN

Como lo señala la Constitución Política de Colombia, todos los servidores públicos son investigados cuando infringen la Constitución o las leyes y por omisión o extralimitación de sus funciones⁵, siendo las Oficinas de Control Interno Disciplinario de cada entidad, la Procuraduría General de la Nación y la Personería Distrital de Bogotá en ejercicio del poder preferente, las que tienen la potestad sancionatoria de los servidores públicos del Distrito⁶.

De otro lado, con el objetivo de que las entidades estatales adelanten los procesos contractuales de manera uniforme, y contribuir a contrarrestar los actos de corrupción que dichas negociaciones pueden generar, la Ley 80 de 1993⁷, la Ley 1150 de 2007⁸ y la Ley 1474 de 2011⁹, establecen las modalidades de contratación, los principios y preceptos que se deben tener en cuenta a la hora de efectuar dicha actividad.

No obstante lo anterior, son varios los procesos disciplinarios que año tras año la Personería Distrital de Bogotá adelanta en contra de Alcaldes Locales como consecuencia de las posibles faltas disciplinarias en que pueden incurrir dentro de los procesos licitatorios por desconocer lo dispuesto en la normatividad anteriormente señalada y vulnerar los principios

⁵ Art. 6 de la Constitución Política de Colombia “*Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.*”

⁶ Art. 78 de la Ley 734 de 2002. “*Competencia de La Procuraduría General De La Nación. Los procesos disciplinarios que adelante la Procuraduría General de la Nación y las personerías distritales y municipales se tramitarán de conformidad con las competencias establecidas en la ley que determina su estructura y funcionamiento y resoluciones que la desarrollen, con observancia del procedimiento establecido en este código.*”

⁷ Art. 23 de la Ley 80 de 1993. “*de los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.*”

⁸ Art. 2 de la Ley 1150 de 2007. “*De las modalidades de selección.*”

⁹ Art. 82 de la Ley 1474 de 2011. “*Disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación estatal.*”

establecidos en la Constitución Política de Colombia que permiten una efectiva función administrativa, pese a que una de las pretensión del estado es la de que sus servidores y funcionarios en el ejercicio de sus funciones hagan buen uso de los recursos que les son confiados, sean comprometidos e íntegros, actúen de manera ética, no se vean envueltos en escándalos y sean objeto de investigaciones disciplinarias como consecuencia de malas prácticas, desconocimiento de la ley y actos arbitrarios y de corrupción, objetivo que como se mencionó se puede ver menguado por la multiplicidad de procesos disciplinarios que adelanta la Personería de Bogotá, como ente de control que forma parte del Ministerio Público.

Es por eso que con este trabajo a través de la recopilación de bibliografía y el análisis de datos brindados por la Personería de Bogotá sobre los procesos disciplinarios que han adelantado en entre los años 2014 y 2018 en contra de los Alcaldes Locales de Bogotá por falencias presentadas en los procesos licitatorios, se pretende determinar si todos ellos han culminado con fallos sancionatorios, o si por el contrario, en varios de ellos sus investigados han sido exonerados de responsabilidad disciplinaria; si con su proceder han vulnerados de manera injustificada los principios de la contratación estatal con los que de una u otra manera se buscan evitar el favoritismo y los actos de corrupción y si reinciden en las conductas investigadas, lo que permitiría concluir si las sanciones impuestas han sido lo suficientemente eficaces como para evitar que los Alcaldes Locales de Bogotá, quienes por su función y la dignidad del cargo que ostentan además de estar sometidos al cumplimiento de las normas se les demanda un comportamiento ético, repitan las actuaciones que dieron origen a los procesos disciplinarios adelantados en contra de ellos.

En el desarrollo del trabajo, con el fin de despejar los cuestionamientos planteados, se abordarán de manera global los temas de la función pública, derecho disciplinario, sanciones disciplinarias, funciones que por mandato legal tiene los Alcaldes Locales de Bogotá y principios

de la contratación estatal. Adicionalmente, como ya se indicó, se tendrán en cuenta los datos brindados por la Personería de Bogotá.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Colombia la Ley y la jurisprudencia han proporcionado herramientas a las entidades estatales para que sus procesos contractuales sean adelantados de manera objetiva, transparente y responsable y para evitar que sus negociaciones resulten infructuosas, necesiten de reprocesos o generen erogaciones económicas diferentes a las inicialmente pactadas que atenten contra la economía pública.

De otro lado, el Código Único Disciplinario establece como sanciones para los servidores públicos, en este caso, para los Alcaldes Locales de Bogotá que incurren en conductas que conllevan al incumplimiento de sus deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses y que son investigados disciplinariamente por la Personería de Bogotá, la destitución¹⁰, la suspensión en el ejercicio del cargo, la multa y la amonestación¹¹.

Sin embargo, a pesar de las sanciones que se han impuesto como consecuencia de las investigaciones disciplinarias adelantadas, son varios los Alcaldes Locales de Bogotá que entre los años 2014 y 2018 han sido sancionados por parte de la Personería de Bogotá por haber incurrido en conductas con las que desconocieron los presupuestos establecidos para la

¹⁰ Art. 23 de la Ley 734 de 2002. “La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28”.

¹¹ Art. 44 de la Ley 734 de 2002. “Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones: 1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima. 2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas. 3. Suspensión, para las faltas graves culposas. 4. Multa, para las faltas leves dolosas. 5. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas”.

celebración de contratos, específicamente, en contratos adelantados a través de procesos licitatorios, siendo ejemplo de ello la Alcaldesa de Fontibón Johanna Bocanegra, quien fue destituida e inhabilitada por 12 años por haber suscrito directamente un contrato interadministrativo por \$9.594 millones con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo Fonade después de haber revocado un proceso licitatorio¹², la Alcaldesa de Sumapaz, Francy Liliana Murcia Díaz, a quien se le formularon cargos por presuntas irregularidades en un proceso licitatorio de rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de malla vial por \$13.199 millones¹³, y la Alcaldesa de Usaquén Mayda Cecilia Velásquez, quien fue destituida e inhabilitada por diez años para ejercer cargos públicos por presuntas irregularidades en la contratación del arreglo de la malla vial de su localidad por \$10.461 millones¹⁴, lo que conlleva a plantearnos *¿Qué tan eficaces son las sanciones que la Personería de Bogotá ha impuesto a los Alcaldes Locales de Bogotá entre los años 2014 y 2018?*.

¹²Recuperado de <https://fontibon360.com/blog/2018/12/12/johanna-bocanegra-fonade-personeria-sancion-disciplinaria/>

¹³Recuperado de <https://www.elspectador.com/noticias/bogota/personeria-distrital-formulo-cargos-la-alcaldesa-local-de-sumapaz-articulo-883814>

¹⁴Recuperado de <http://elsiaradio.com/personeria-de-bogota-destituye-alcaldesa-de-usaquen/>

3. JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que son varias las investigaciones disciplinarias que la Personería Distrital de Bogotá ha adelantado en contra de los Alcaldes Locales por las conductas que han desplegado dentro de los procesos licitatorios, es importante determinar si las sanciones impuestas como consecuencia de las referidas investigaciones han sido eficaces, o si por el contrario, no han contribuido a generar consciencia en los servidores públicos que deben propender porque se cumplan los fines del estado a través de los cargos que desempeñan, lo que ocasionaría reprocesos, retrasos en la ejecución de los objetos contractuales, detrimento patrimonial, sentimientos de inconformidad en los gobernados y podría llevar a cuestionar si las sanciones son irrelevantes y no resarcen de manera alguna los perjuicios causados.

Aunado a lo anterior, el tema planteado es de gran relevancia social, pues los administrados esperan que el dinero recaudado a través del pago de impuestos se invierta de manera íntegra en beneficio de todos y que no sean unos pocos los que saquen provecho de él.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

Analizar si las sanciones disciplinarias impuestas por la Personería de Bogotá entre los años 2014 y 2018 a los Alcaldes Locales de Bogotá por incurrir en yerros dentro de los procesos licitatorios, han sido lo suficientemente severas y ejemplarizantes.

4.2 Objetivos Específicos

Identificar cuántos de los procesos disciplinarios que adelantó la Personería Distrital de Bogotá entre los años 2014 y 2018, por conductas desplegadas por los Alcaldes Locales de Bogotá que intervinieron en los procesos licitatorios culminaron con fallos sancionatorios.

Comparar la cantidad de procesos disciplinarios que culminaron con fallos sancionatorios y que fueron adelantados por la Personería de Bogotá desde el año 2014 hasta el año 2018 contra los Alcaldes Locales por falencias en los procesos licitatorios.

Establecer si los Alcaldes Locales investigados disciplinariamente por la Personería de Bogotá entre los años 2014 y 2018, con ocasión de las falencias presentadas en procesos licitatorios adelantados reincidieron en las conductas investigadas.

5. MARCO JURÍDICO

Este trabajo tuvo como fundamento las normas a continuación relacionada, en las que se hace referencia a los principios de la administración pública, la contratación estatal, las faltas y sanciones disciplinarias, las funciones de los Alcaldes Locales y las funciones de la Personería de Bogotá.

Constitución Política de Colombia. Como es bien sabido la Constitución Política de Colombia es el pilar de la normatividad colombiana y en su artículo 6 establece que los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Ley 80 de 1993 por la cual se expidió el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en su artículo 23 trata el tema de los principios de responsabilidad, economía y transparencia los cuales deben aplicarse en todas las actuaciones contractuales de las entidades estatales.

Ley 734 de 2002, por la cual se expidió el Código Único Disciplinario y establece en sus artículos 3, 16, 23, 25, 39, 43, 44, 52 y 78 el poder preferente que tiene la Procuraduría General de la Nación y las Personerías Locales y Municipales para adelantar los procesos disciplinarios en contra de los servidores públicos del Distrito, la función preventiva y correctiva de la sanción disciplinaria, las conductas que constituyen falta disciplinaria, los destinatarios de las sanciones disciplinarias, las incompatibilidades que tiene un servidor público en el ejercicio del cargo y los criterios que se deben tener en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, las clases de sanciones, temas que son abordados en el desarrollo de este trabajo.

Ley 1150 de 2007 por medio de la cual se introdujeron medidas para la eficiencia y transparencia de la Ley 80 de 1993 y se dictaron otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos la cual en su artículo 2 hace alusión a las modalidades de selección e indica que la escogencia del contratista debe hacerse por regla general a través de licitación pública y en su artículo 5 establece que su selección debe ser objetiva teniendo en cuenta el ofrecimiento más favorable para la entidad.

Ley 1474 de 2011 en la que se dictaron normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública y en sus artículos 82 y 84 determina las facultades y deberes de los supervisores, al igual que la forma en que los consultores y asesores responden por el incumplimiento de sus funciones.

Decreto 1421 de 1993 a través del cual se dictó el régimen especial para el Distrito Capital y específicamente su artículo 86 en el que se señalan las funciones de los Alcaldes Locales entre las que se encuentra la de cumplir y hacer que se cumpla la Constitución, la ley, y las demás normas nacionales aplicables, los acuerdos distritales y locales y las decisiones de las autoridades distritales.

Acuerdo 514 de 2012 en el que se modificó la estructura organizacional de la planta de empleados de la Personería de Bogotá y que en su artículo 28 indica las funciones de la Personería Delegada para la Coordinación de Asuntos Disciplinarios.

6. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO

6.1 CAPITULO I - LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

6.1.1 Definición de la Función Administrativa y la Función Pública.

Colombia por ser un estado social de derecho busca que sus servidores y funcionarios públicos presten sus servicios anteponiendo el bien general al particular y cumplan a cabalidad con lo establecido en la Constitución Política de Colombia, es decir que ejerzan una buena función administrativa y cumplan con los principios de la función pública.

Podría decirse que la función pública es toda actividad tendiente a la satisfacción del interés general a través del Estado, quien para el cumplimiento de sus principios y finalidades, se organiza constitucional y legalmente a través de personas, las que en su nombre tienen la obligación de imponer unas condiciones administrativas que le permiten funcionar social y patrimonialmente (Mejía, 2015, p 1)¹⁵.

De otro lado, la función administrativa activa es aquella por medio de la cual un órgano busca realizar el derecho y cumplir sus fines y cometidos. Es pues una labor en donde los servidores públicos deciden y ejecutan, por lo cual la doctrina suele señalar que al lado de esa administración activa existe una administración pasiva o de control, cuya tarea no es ejecutar acciones administrativas sino verificar la legalidad y, en ciertos casos, la eficacia y eficiencia de gestión de la Administración activa. Esta función administrativa activa es esencial y propia de la rama ejecutiva, pero no es exclusiva de ella, pues en los otros órganos del Estado también es necesario que los servidores públicos adelanten actividades de ejecución para que la entidad

¹⁵ Jaime Mejía Ossman, Derecho Disciplinario Sustancial, Especial y Forma, 2015, p.1.

pueda cumplir sus fines¹⁶.

6.1.2 Principios de la función administrativa

El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, de los cuales es procedente realizar un breve recuento.

Principio de igualdad: hace referencia a que todos los colombianos, sin importar sus condiciones de raza, genero, económicas, religión etc debe garantizárseles el cumplimiento y protección de sus derechos y a participar con las mismas condiciones en procesos de manera objetiva.

Principio de moralidad: comprende el buen actuar y comportamiento ético que se le demanda a todo servidor y funcionario público en el ejercicio de sus funciones por el bien común.

Principio de eficacia: este principio de la administración impone deberes y obligaciones a las autoridades para garantizar la adopción de medidas de prevención y atención de los ciudadanos del país, para garantizar su dignidad y el goce efectivo de sus derechos, especialmente de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, de la población carcelaria, de las víctimas de desastres naturales o del conflicto interno, población en estado de indigencia, de manera que en muchas ocasiones se ha ordenado a

¹⁶ Corte Constitucional, , Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero, 6 de mayo de 1998, expediente D-1859, Sentencia C-189/98

la administración pública la adopción de medidas necesarias que sean realmente eficaces para superar las crisis institucionales y humanitarias generadas por dichas situaciones, sin que para ello se presente como óbice argumentos de tipo presupuestal¹⁷.

Principio de economía: busca que se sus servidores y funcionarios públicos hagan un óptimo uso de los recursos y que en el desarrollo de sus funciones minimicen procedimientos innecesarios.

Principio de celeridad: La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que éste implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al cumplimiento de sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos con la mayor prontitud, y que de esta manera su gestión se preste oportunamente cubriendo las necesidades y solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en general¹⁸.

Principio de imparcialidad: su objetivo es que quienes deben tomar decisiones en representación de la Administración lo hagan sin tener favoritismos de ninguna índole o con las que se pretendan solventar intereses individuales.

Principio de publicidad: Se manifiesta de dos formas: como deber y como derecho. Por una parte, se trata del deber que tienen las entidades contratantes de comunicar a los administrados la totalidad de las actuaciones que realizan dentro de los procesos de selección de sus contratistas. Ello no podría ser de otro modo, pues la publicación generalizada de la

¹⁷ Corte Constitucional, Magistrado Ponente Jorge Arango Mejía, 13 de noviembre de 2013, Expediente D-9623, Sentencia C-826/13

¹⁸ Corte Constitucional, Magistrado Ponente Jorge Arango Mejía, 13 de noviembre de 2013, Expediente D-9623, Sentencia C-826/13

información referida a los procesos de contratación que adelantan las entidades del Estado es la que permite que a los mismos asistan todas aquellas personas interesadas en la ejecución de los proyectos allí tratados y que toda la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer la actividad contractual de la Administración, como garantía de transparencia. En otras palabras, el principio de publicidad implica que todas las autoridades deben dar a conocer sus actuaciones y decisiones a través de los distintos mecanismos previstos en la ley, como comunicaciones, notificaciones o publicaciones, a fin de que sean vinculantes y puedan ser controvertidas por sus destinatarios.¹⁹

6.1.3 Funciones de los Alcaldes Locales

La administración Distrital de Bogotá para cumplir con los fines del Estado colombiano cuenta con 20 Alcaldes Locales elegidos por el Alcalde Mayor de Bogotá, quien los escoge de las ternas presentadas por las Juntas Administradoras Locales.

Las funciones de los Alcaldes Locales de Bogotá son las siguientes²⁰:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, las demás normas nacionales aplicables, los acuerdos distritales y locales y las decisiones de las autoridades distritales.
2. Reglamentar los respectivos acuerdos locales.
3. Cumplir las funciones que les fijen y deleguen el Concejo, el alcalde mayor, las juntas administradoras y otras autoridades distritales.
4. Coordinar la acción administrativa del Distrito en la localidad.
5. Velar por la tranquilidad y seguridad ciudadanas. Conforme a las disposiciones vigentes, contribuir a la conservación del orden público en su localidad y con la ayuda de las autoridades nacionales y distritales, restablecerlo cuando fuere turbado.

¹⁹ Recuperado de <https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-la-contrataci%C3%B3n-estatal>

²⁰ Art. 86 del Decreto 1421 de 1993. “Atribuciones. Corresponde a los alcaldes locales”.

6. Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo urbano, uso del suelo y reforma urbana. De acuerdo con esas mismas normas expedir o negar los permisos de funcionamiento que soliciten los particulares. Sus decisiones en esta materia serán apelables ante el jefe del departamento distrital de planeación, o quien haga sus veces.

7. Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público, el patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el ambiente, con sujeción a la ley, a las normas nacionales aplicables, y a los acuerdos distritales y locales.

8. Conceptuar ante el secretario de gobierno sobre la expedición de permisos para la realización de juegos, rifas y espectáculos públicos en la localidad.

9. Conocer de los procesos relacionados con violación de las normas sobre construcción de obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondientes. El Concejo Distrital podrá señalar de manera general los casos en que son apelables las decisiones que se dicten con base en esta atribución y ante quién.

10. Expedir los permisos de demolición en los casos de inmuebles que amenazan ruina, previo concepto favorable de la entidad distrital de planeación.

11. Vigilar y controlar la prestación de servicios, la construcción de obras y el ejercicio de funciones públicas por parte de las autoridades distritales o de personas particulares.

12. Ejercer, de acuerdo con la ley, el control de precios, pesas y medidas y emprender las acciones necesarias para evitar o sancionar el acaparamiento y la especulación, y

13. Ejercer las demás funciones que les asignen la Constitución, la ley, los acuerdos distritales y los decretos del alcalde mayor.

6.1.4 Generalidades del Derecho Disciplinario

La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública²¹.

Un elemento que se debe destacar, no solo en lo que tiene que ver con los procesos disciplinarios, sino respecto de la aplicación de las sanciones, es que este régimen recae, en principio, básicamente sobre servidores públicos.

Este espectro incluye funcionarios de distintos órdenes, como son los propios de la rama ejecutiva, al igual que de la rama judicial y la legislativa, lo cual deriva de una condición que estos ostentan: el vínculo especial que liga a estos funcionarios con el Estado, originado en su relación legal y reglamentaria, pero también en los contratos de trabajo de carácter oficial o por la especial forma en que adquieren su estatus, mediante elección popular (Brito, 2012, p 35)²².

La Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario en cuyo desarrollo puede iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas. Igualmente puede asumir el proceso en segunda instancia.

En virtud de la misma potestad, mediante decisión motivada, de oficio o a petición de cualquier persona, puede avocar el conocimiento de aquellos asuntos que se tramitan internamente

²¹Art. 16 de la Ley 734 de 2002. *Función de la Sanción Disciplinaria*.

²² Fernando Brito Ruiz, Régimen Disciplinario. 2012, p.35.

en las demás dependencias del control disciplinario. También se procede en la misma forma cuando se desprende del conocimiento de un proceso.

El Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer, hasta la terminación del proceso, de las faltas atribuidas a los funcionarios de la rama judicial, salvo los que tienen fuero constitucional.

Las personerías municipales y distritales tienen frente a la administración poder disciplinario preferente²³.

6.1.5 La Personería de Bogotá

La Personería de Bogotá entre sus funciones tiene la de vigilar la conducta de los servidores públicos del Distrito Capital, lo que ejerce a través de la Personería Delegada para Coordinación de Asuntos Disciplinarios, cuatro Personerías Delegadas para Asuntos Disciplinarios, la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico y la Personería de Segunda Instancia Delegada para Asuntos Disciplinarios²⁴.

Funciones de la Personería Delegada para la Coordinación de Asuntos Disciplinarios. Corresponde a esta Dependencia realizar las siguientes funciones:

1. Formular las Políticas y planes para el ejercicio de los asuntos disciplinarios por parte de las Personerías Delegadas.
2. Establecer las directrices para el correcto procedimiento en los asuntos de carácter disciplinario en cada una de las Delegadas y en la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico.

²³Art. 3 de la Ley 734 de 2002. *Poder Disciplinario Preferente*.

²⁴ Numeral 8 del Artículo 100 del Decreto 1421 de 1993. “*Son atribuciones del personero como veedor ciudadano. 8. Vigilar la conducta oficial de los ediles, empleados y trabajadores del Distrito, verificar que desempeñen cumplidamente sus deberes, adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones que fueren del caso todo de conformidad con las disposiciones vigentes*”.

3. Adelantar las investigaciones respecto de los servidores públicos de las Entidades del Distrito Capital conforme a las normas vigentes.

4. Dirigir la expedición de los actos administrativos que le correspondan a cada Delegada de Disciplinario.

5. Vigilar que las Personerías Delegadas para Asuntos Disciplinarios, cumplan con los procedimientos establecidos para el ejercicio de sus funciones con fines al empoderamiento institucional ante la ciudad.

6. Dirigir la elaboración de los diferentes informes de cada Delegada de Disciplinarios que se deben presentar interna y externamente.

7. Las demás fijadas por la Ley, los Acuerdos, los Estatutos y los Reglamentos²⁵.

Ahora bien, en este punto es de suma importancia resaltar que, debido al poder preferente que constitucionalmente se le otorgó a la Personería de Bogotá para adelantar los procesos disciplinarios en contra de los servidores públicos del Distrito, no solo se le demanda adelantar las investigaciones en tiempos razonables y con apego a la normatividad, sino que además imponga sanciones ejemplarizantes que sirvan de referente para evitar que los sujetos susceptibles de ese tipo de investigaciones incurran en las mismas conductas por las que fueron sancionados.

6.1.6 Procesos disciplinarios adelantados por la Personería Distrital de Bogotá entre los años 2014 y 2018 en contra de Alcaldes Locales que actuaron en procesos licitatorios

De la consulta realizada a la página SECOP surge que la cantidad de procesos

²⁵ Art. 28 del Acuerdo 514 de 2012. “*Funciones de la Personería Delegada para la Coordinación de Asuntos Disciplinarios*”.

licitatorios adelantados por las localidades de las cuales sus Alcaldes Locales fueron investigados por la Personería de Bogotá entre los años 2014 y 2018 con ocasión de los procesos licitatorios adelantados fue la siguiente:

Localidad	licitaciones adelantadas en 2014	licitaciones adelantadas en 2015	licitaciones adelantadas en 2016	licitaciones adelantadas en 2017	licitaciones adelantadas en 2018
Teusaquillo	4	10	7	2	0
Usme	9	6	8	11	7
Suba	11	12	4	4	7
Kennedy	5	15	11	8	1
Fontibón	3	5	10	12	0
Tunjuelito	3	4	8	15	3
Rafael Uribe Uribe	4	6	15	0	4
Puente Aranda	8	8	3	1	2
La Candelaria	1	5	12	9	5
Ciudad Bolívar	12	15	22	16	0
Barrios Unidos	10	3	4	0	0
Total	70	89	104	78	29

Tabla 1. Cantidad de procesos licitatorios adelantados.

Información recuperada de <https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#>

Lo anterior demuestra que el año 2016 fue en el que más procesos licitatorios adelantaron las Alcaldías de las localidades en que sus administradores fueron investigados por la Personería de Bogotá entre los años 2014 al 2018 y en el que menos se llevaron a cabo fue en el 2018.

De otro lado se tiene que la cantidad de proceso disciplinarios adelantados por la Personería de Bogotá en los años referidos contra los aludidos funcionarios públicos fue:

Año	Investigaciones	Porcentaje
2014	77	11%
2015	102	15%
2016	208	30%
2017	191	28%
2018	113	16%

Tabla 2. Cantidad de procesos disciplinarios.

Información brindada por la Personería de Bogotá



Figura 1. Proyección de investigaciones adelantadas entre los años 2014 y 2018

Así las cosas, se puede concluir que el año en el que más procesos disciplinarios se adelantaron en contra de Alcaldes Locales de Bogotá por irregularidades en los procesos licitatorios fue el 2016 y en el que menos en el 2014. También se concluye que hay una tendencia de aumento de investigados hacia los años 2016, 2017 y 2018 y que el año en el que más procesos licitatorios se adelantaron es el mismo en el que se hicieron más investigaciones con ocasión de las referidas negociaciones.

6.2 CAPITULO II - CONTRATACIÓN ESTATAL Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

6.2.1 Etapas y principios de la contratación estatal

El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos

instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. El interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los servidores que la representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del Estado²⁶.

Ramos Acevedo (2018) refiere que la contratación estatal comprende cuatro etapas:

La previa: considerada como la estructuración de los procedimientos de selección del contratista

La precontractual: que inicia con la publicación en la página web dentro del Portal Único de Contratación de la Resolución de Apertura y concluye con la expedición de la Resolución de Adjudicación del contrato.

La contractual: que va desde que se lleva a cabo el perfeccionamiento del contrato plasmando el negocio por escrito.

La poscontractual: que consiste en el levantamiento de un acta de liquidación, en donde se procede a manifestar el reconocimiento y cobro de las obligaciones recíprocas pendientes como es las actas parciales de cobro por parte del contratista y las sanciones pecuniarias y las garantías a que hubiere lugar.²⁷

²⁶ Corte Constitucional, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa, 7 de octubre de 2009, Expediente D-7663, Sentencia C-713/09

²⁷ Jairo Ramos Acevedo y Amparo Ramos Acevedo, Contratación Estatal Teoría General y Especial, 2018, p.109,136, 157, 194.

Las etapas contractuales no solo permiten que las entidades estatales cuenten con un paso a paso de los procedimientos que se deben agotar para llevar a cabo una negociación, sino que además contribuyen a identificar la responsabilidad que tiene cada uno de sus intervinientes, lo que favorece a que no se adelanten investigaciones inocuas por indebidas vinculaciones.

Por ejemplo, a un Alcalde Local que ejerce la supervisión de un contrato, es decir que actúan en la etapa contractual, no se le puede endilgar falta disciplinaria por las falencias derivadas de la elaboración del pliego de condiciones, es decir por hechos acaecidos en la etapa precontractual, contrario sensu, si aquel suscribe un contrato (etapa contractual) bajo la modalidad de contratación directa pese a que por tratarse de un tema de obras tenga que adelantarse un proceso licitatorio.

De otro lado, el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 dispone que las actuaciones de quienes intervienen en la contratación estatal deben ser desarrolladas con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa, postulados que anteriormente fueron analizados, por lo que resulta procedente hacer mención de los principios que aún no han sido estudiados.

Principio de transparencia. El principio de transparencia en la contratación estatal comprende aspectos tales como: i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la Administración; v) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta; vi) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la Administración.

Principio de Responsabilidad. Para garantizar el cumplimiento del principio de responsabilidad los servidores públicos que intervienen en la actividad contractual responder fiscal, penal y disciplinariamente, razón por la cual están obligados a cumplir los fines de la contratación, vigilando la correcta ejecución de lo contratado y velando por la protección de los derechos de la entidad y del contratista (Nos. 1 y 8 art. 26 ley 80 de 1993); responden por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deben indemnizar los daños que se causan por razón de ellas; verbigracia, cuando han abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia han sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conducen a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquéllos²⁸.

Por su parte, la Ley 1150 de 2007 hace referencia a la selección objetiva así:

De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva²⁹

6.2.2 Licitación pública

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 señala que la escogencia del contratista se efectúa por regla general a través de licitación pública con las excepciones de la selección abreviada (selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio,

²⁸Recuperado de <https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-la-contrataci%C3%B3n-estatal>

²⁹ Art. 5 Ley 1150 de 2007. *De la selección objetiva.*

pueden adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual), concurso de méritos (prevista para la selección de consultores o proyectos) y contratación directa (la que procede en caso de urgencia manifiesta, contratación de empresitos, contratos interadministrativos, contratación de bienes y servicios en el sector defensa, contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, contratos de encargos fiduciarios, cuando no exista pluralidad de oferentes, para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, arrendamiento y adquisición de inmuebles y la contratación de bienes y servicios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que requieran reserva para su adquisición).

En consecuencia, los funcionarios que celebran los contratos como representantes de las entidades estatales, en este caso, los Alcaldes Locales de Bogotá, están en la obligación de agotar las modalidades de contratación que según la necesidad que se busca suplir establece la norma y no otra, pues de no proceder de esa manera estarían vulnerando la ley y por tanto deben ser investigados disciplinariamente.

6.2.3 Cantidad de procesos disciplinarios adelantados en contra de Alcaldes Locales por la Personería de Bogotá que culminaron con fallos sancionatorios entre los años 2014 y 2018 por falencias en los procesos licitatorios

La Personería de Bogotá entre los años 2014 y 2018 adelanto 691 procesos disciplinarios en contra de alcaldes locales de Bogotá por irregularidades en procesos licitatorios, sin embargo, solo 22 de sus investigados fueron sancionados disciplinariamente como se pasa a ver:

	Procesos	Porcentaje
Investigaciones sin sanción	669	97%
Investigaciones con sanción	22	3%
Total Investigaciones	691	100%

Tabla 3. Cantidad de procesos disciplinarios con sanción

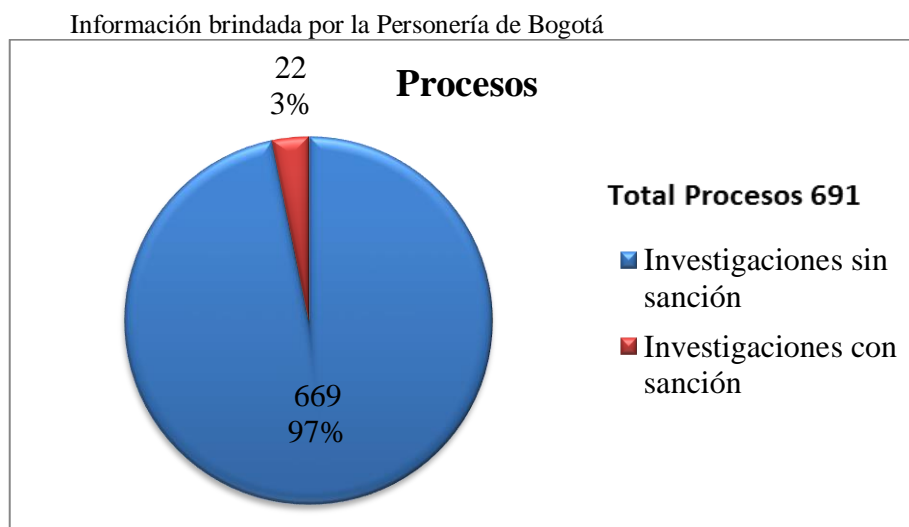


Figura 2. Cantidad de procesos disciplinarios adelantados

Es decir, que entre los años 2014 y 2018 únicamente el 3% de los Alcaldes Locales investigados por la Personería de Bogotá fueron sancionados, que en el 97% restante fueron absuelto y que los procesos en los que no se dictó sentencia, se terminaron anticipadamente ya sea porque se dio el fenómeno jurídico de la caducidad o la prescripción, porque se terminó la investigación debido a que sus investigados se encontraban inmersos en alguna causal de justificación o eximente de responsabilidad, o simplemente porque no cometieron los hechos que dieron origen a los procesos.

6.3 CAPITULO III - RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA Y SANCIONES

6.3.1 Responsabilidad disciplinaria de los funcionarios y servidores públicos

Son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos aunque se encuentren retirados del servicio, los indígenas que administran recursos del Estado, los gerentes de cooperativas, fundaciones, corporaciones y asociaciones que se crean y organizan por el Estado o

con su participación mayoritaria³⁰.

También lo son los particulares que cumplen labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales; también quienes ejercen funciones públicas de manera permanente o transitoria en lo que tienen que ver con éstas, y quienes administran recursos públicos u oficiales³¹.

6.3.2 Clasificación de las faltas

La legislación colombiana para una mejor aplicación de las sanciones y brindar garantías a los investigados a clasificado las faltas en gravísimas, las cuales están taxativamente descritas en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y entre las que se destacan en materia de contratación estatal las siguientes:

Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal con persona que esté incurso en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución o en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos previos requeridos para su ejecución o sin la previa obtención de la correspondiente licencia ambiental.

Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.

Declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por terminado sin que se presenten las causales previstas en la ley para ello.

³⁰ Art. 25 de la Ley 734 de 2002. *Destinatarios de la ley disciplinaria.*

³¹ Art. 52 de la Ley 734 de 2002. *Sujetos disciplinables.*

Aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de los contratos sin existir las causales previstas en la ley.

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento³².

También están las faltas graves y leves cuyos criterios se indican en el artículo 43 ibídem, así:

Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios:

1. El grado de culpabilidad.
2. La naturaleza esencial del servicio.
3. El grado de perturbación del servicio.
4. La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución.
5. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.

6. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o de la que se derive de la naturaleza del cargo o función, el grado de participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla, o si la cometió

³² Numeral modificado por el párrafo 1° del Art. 84 de la Ley 1474 de 2011.

en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, debidamente comprobadas.

7. Los motivos determinantes del comportamiento.

8. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos.

9. La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta grave³³.

6.3.3 Sanciones Disciplinarias

El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:

1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima.

2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas.

3. Suspensión, para las faltas graves culposas.

4. Multa, para las faltas leves dolosas.

5. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas³⁴.

6.3.4 Reincidencia por parte de los Alcaldes Locales de Bogotá en las conductas investigadas por la Personería de Bogotá entre los años 2014 y 2018 con ocasión de las falencias presentadas en procesos licitatorios.

De la información suministrada por la Personería de Bogotá se desprende que 11 de los

³³ Art. 43 de la Ley 734 de 2002. *Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta.*

³⁴ Art. 44 de la Ley 734 de 2002. *Clases de sanciones.*

20 Alcaldes Locales de Bogotá fueron objeto de investigación por parte de esa entidad entre los años 2014 y 2018 por irregularidades presentadas en procesos licitatorios como se pasa a ver:

Localidad	Sanciones Por Localidad
Teusaquillo	4
Usme	4
Suba	3
Kennedy	3
Fontibón	2
Tunjuelito	2
Rafael Uribe Uribe	1
Puente Aranda	1
La Candelaria	1
Ciudad Bolívar	1
Barrios Unidos	1
	23

Tabla 4. Cantidad de sanciones por localidad
Información brindada por la Personería de Bogotá

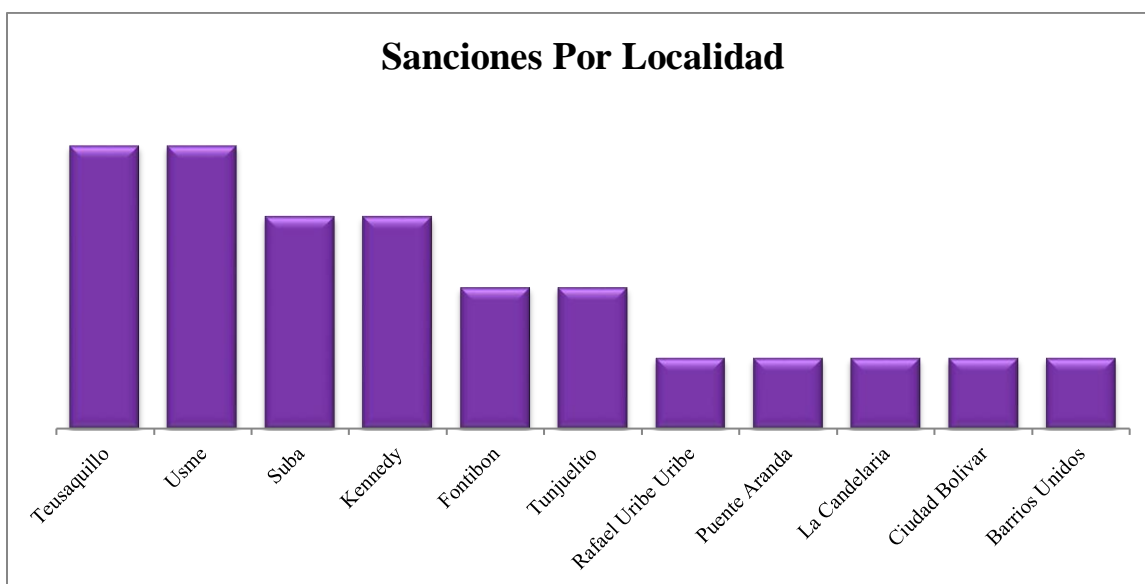


Figura 3. Cantidad de sanciones por localidad

Igualmente, se tiene que las localidades que más investigaciones presentaron entre los años 2014 y 2018 con ocasión de las conductas desplegadas por sus Alcaldes Locales dentro de

los procesos licitatorios fueron las de Teusaquillo y Usme, y por tanto las que presentan mayor probabilidad de reincidencia en las conductas investigadas, sin embargo teniendo en cuenta la cantidad de procesos disciplinarios adelantados (691) se puede concluir que son menos los servidores públicos que desconocen la normatividad en materia contractual y que si bien han sido objeto de investigaciones disciplinarias las sanciones impuestas han sido lo suficientemente ejemplarizantes como para evitar que otros funcionarios cometan las mismas faltas.

Así mismo, de la información recopilada se puede concluir que la localidad con mayor porcentaje de sanciones fue la de Teusaquillo con un 17% de los procesos licitatorios adelantados, seguida por la localidad de Usme que presenta un 10% de sanción con respecto a los procesos licitatorios celebrados y que la localidad con menor porcentaje de procesos sancionados es Ciudad Bolívar, pese a ser la localidad con mayor cantidad de procesos licitatorios 65 vs el promedio 33 procesos de todas la localidades como se visualiza en el siguiente cuadro y gráfica:

Localidad	Total procesos licitatorios adelantados	Sanciones por Localidad	% sanción
Teusaquillo	23	4	17%
Usme	41	4	10%
Suba	38	3	8%
Kennedy	40	3	8%
Fontibón	30	2	7%
Tunjuelito	33	2	6%
Barrios Unidos	17	1	6%
Puente Aranda	22	1	5%
Rafael Uribe Uribe	29	1	3%
La Candelaria	32	1	3%
Ciudad Bolívar	65	1	2%
Total	370	23	6%

Tabla 5. Indicador por localidad

Información brindada por la Personería de Bogotá y de la página SECOP

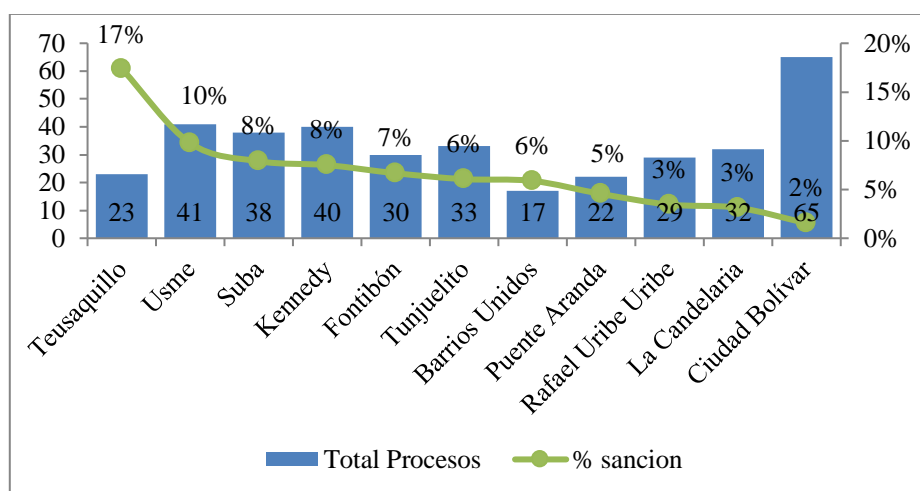


Figura 4. Indicador por localidad de procesos licitatorios celebrados y la cantidad de sanciones impuestas entre los años 2014 y 2018

7. CONCLUSIONES

- El estado Colombiano ha proporcionado a sus funcionarios y servidores públicos, entre ellos a los Alcaldes Locales de Bogotá, herramientas no solo presupuestales, sino administrativas y legales para cumplir sus fines a través de una buena administración pública.

Igualmente, se ha blindado de mecanismos para evitar que en el ejercicio de sus funciones ya sea por extralimitación, omisión o violación al régimen de incompatibilidades e inhabilidades en el ejercicio de sus funciones los aludidos funcionarios públicos cercenen dicho propósito.

Entre los mecanismos adoptados está el de la aplicación del procedimiento disciplinario, por lo que resulta indispensable que, quienes ejercen cargos públicos y representan a la administración sean personas integras, que busquen el bien común y propendan a salvaguardar los derechos de los administrados.

- La Personería de Bogotá debido a la competencia que en ese sentido le fue conferida constitucionalmente, cumple un papel fundamental en el control del proceder de los servidores y funcionarios públicos del Distrito a la hora de ejercer sus funciones. De ahí que es esencial que actúe con total imparcialidad y que profiera decisiones ejemplarizantes en caso de concluir que los investigados han incurrido en falta disciplinaria.

Lo anterior, si se tiene en cuenta que un servidor o funcionario público con su conducta no solo puede verse inmerso en un proceso disciplinario, sino que además puede llegar a afectar los intereses de los administrados.

- Es preciso que cuando las entidades estatales celebren contratos no vulneren los principios de la contratación estatal, los cuales además de pretender evitar que se actúe en contravía de lo estipulado frente al tema en la legislación y la jurisprudencia a través de actos de clientelismo o favorecimiento de intereses particulares, buscan salvaguardar los intereses y el patrimonio de los ciudadanos, quienes en últimas son los más perjudicados cuando se incurre en esa clase de conductas.

Adicionalmente, un comportamiento ético es lo mínimo que se espera de los funcionarios y servidores públicos que representan a las entidades estatales, si se tiene en cuenta que en el momento de la posesión estos adquieren el compromiso de cumplir la constitución y las leyes.

Es decir que no solo deben limitarse a desarrollar las funciones que les son asignadas de acuerdo al cargo que ejercen, sino que además deben hacerlo anteponiendo el interés general al individual.

- La contratación estatal puede ser una de las actividades con las cuales los Alcaldes Locales más pueden llegar a incurrir en faltas disciplinarias debido a la multiplicidad de etapas y principios que dicha actividad contempla.
- Para ello cuentan con autonomía para el desempeño de sus funciones y específicamente, para adelantar negociaciones estatales, la cual debe ser asumida de manera responsable y con total decoro.

Por consiguiente, es necesario que previo a la celebración de cada contrato se realicen estudios serios y confiables para evitar que las entidades estatales incurran en sobrecostos originados por la falta de planeación y que la ejecución del contrato supla a cabalidad la necesidad que dio origen a la negociación.

- El hecho de que un servidor o funcionario público al momento de adelantarse la investigación disciplinaria en su contra, no esté ejerciendo el cargo que estaba desempeñando cuando cometió la falta disciplinaria, no lo exime de ser investigado y posiblemente sancionado.

Dicha situación contribuye a que sean menos las actuaciones irregulares cobijadas de impunidad, lo que genera confianza en los ciudadanos que acuden a la Personería de Bogotá en busca de respuestas relacionadas con el actuar de los servidores y funcionarios públicos en el desarrollo de sus funciones.

Así mismo, demuestra que la sanción disciplinaria no obedece a un acto de mera discrecionalidad por parte del operador disciplinario, arbitrario o caprichoso, sino que es consecuencia directa de la comisión sin justificación alguna de la conducta que la genera.

- Los datos analizados en este trabajo permiten concluir que únicamente el 3% de los Alcaldes Locales investigados dentro de los procesos disciplinarios adelantados por la Personería de Bogotá por licitaciones públicas entre los años 2014 y 2018 fueron sancionados.

Así las cosas, la cantidad de conductas irregulares desplegadas por parte de los Alcaldes Locales dentro de los procesos licitatorios es baja y en consecuencia se puede concluir que no es reiterado su proceder.

También se pudo determinar que los Alcaldes Locales, pese al aumento de procesos disciplinarios que se adelantaron año tras año, propendieron por el cumplimiento de los principios establecidos para esa clase de negociaciones y que las sanciones impuestas por la Personería de Bogotá fueron lo suficientemente eficaces y ejemplarizantes.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Brito Ruiz, F. (2012). Régimen Disciplinario. (4ta ed.) Bogotá. Mexico D.F. Buenos Aires. Caracas. Lima. Santiago. Editorial Legis.
- Mejía Ossman, J. (2015). Derecho Disciplinario Sustancial, Especial y Forma,(1ra ed.). Bogotá. Editorial Ediciones Doctrina y Ley Ltda.
- Ramos Acevedo, J y Ramos Acevedo, A. (2018). Contratación Estatal Teoría General y Especial (5ta ed.). Bogotá. Editorial Ibáñez.
- Colombia. Concejo de Bogotá. Acuerdo 514 (18, diciembre, 2012).
- Colombia. Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de Colombia (6, julio,1991).
- Colombia. Decreto 1421 (21, julio, 1993). Por la cual se dictó el Régimen Especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá.
- Colombia. Congreso de la República. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Diario Oficial No. 41.094.
- Colombia. Congreso de la República. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. Diario Oficial No. 46.691.
- Colombia. Congreso de la República. Ley 734 (5, febrero, 2002). Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico. Diario Oficial No. 44.708.
- Colombia. Congreso de la República. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Diario Oficial No. 46.691.

Colombia. Congreso de la República. Ley 1474 (12, julio, 2011). Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Diario Oficial No. 48.128.

Recuperado de <https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#>

Recuperado de <https://www.elspectador.com/noticias/bogota/personeria-distrital-formulo-cargos-la-alcaldesa-local-de-sumapaz-articulo-883814>

Recuperado de <http://elsiaradio.com/personeria-de-bogota-destituye-alcaldesa-de-usaquen/>

Recuperado de <https://fontibon360.com/blog/2018/12/12/johanna-bocanegra-fonade-personeria-sancion-disciplinaria/>

Recuperado de <https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-la-contrataci%C3%B3n-estatal>

Corte Constitucional, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero, 6 de mayo de 1998, expediente D-1859, Sentencia C-189/98

Corte Constitucional, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa, 7 de octubre de 2009, Expediente D-7663, Sentencia C-713/09

Corte Constitucional, Magistrado Ponente Jorge Arango Mejía, 13 de noviembre de 2013, Expediente D-9623, Sentencia C-826/13

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Magistrada Ponente Ruth Stella Correa Palacio, 28 de mayo de 2012, Proceso 07001-23-31-000-1999-00546-01(21489)

9. ANEXOS

Anexo No. 1 RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN ELEVADO A LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ PARA OBTENER LOS DATOS CITADOS EN ESTE TRABAJO

Personería de Bogotá, D. C. <small>Al servicio de la ciudad</small> 	COMUNICACIÓN GENERAL		Código: 07-FR-81	
			Versión: 3	Página 1 de 1
			Vigente desde: 11-06-2019	

Bogotá D.C.

PERSONERIA DE BOGOTA 02-12-2019 04:05:55
Al Contestar Cite Este Nr.: 2019EE1035689 O 1 Fol. 1 Anex: 5
Origen: Sd: 21456 - SECRETARIA COMUN - ASUNTOS DISCIPLIN
Destino: /MARIA CORREA
Asunto: RESPUESTA RAD2019 ER 777490 -LOS ANEXOS HACE
Obs.: MAIL

Señora
MARÍA CORREA
daviperg@gmail.com

Asunto: Radicado 2019ER777490

Respetada Señora María Correa:

En atención a la petición de la referencia le comunico que consultadas las bases de datos del Eje Disciplinario con corte al 13 de noviembre del año en curso, se estableció lo siguiente:

1. En cuanto a la inquietud plasmada en el primer numeral se tiene la siguiente información:


VIGENCIA	N° ACTUACIONES
2014	77
2015	102
2016	208
2017	191
2018	113

2. Respecto al numeral segundo de la petición se evidenció que se han proferido veintitrés (23) fallos sancionatorios en contra de Alcaldes Locales por hechos relacionados con irregularidades en las licitaciones públicas; se aclara que dicha información hace referencia a las actuaciones registradas en las bases de datos del Eje Disciplinario entre el 2012 al 2019¹.

En los archivos adjuntos se aportan copias digitalizadas de los fallos sancionatorios emitidos dentro de los procesos disciplinarios 502839/15, 15845/14, 508289/15, 52591/13 y 15964/15.

¹ Entre las vigencias 2014 a 2018 registran veintidós (22) fallos sancionatorios.

Al servicio de la ciudad

Personería de Bogotá, D. C. Al servicio de la ciudad 	COMUNICACIÓN GENERAL	Código: 07-FR-81	
		Versión: 3	Página 1 de 1
		Vigente desde: 11-06-2019	

3. En relación con la tercera solicitud se recopiló la siguiente información:

ALCALDÍA LOCAL	FALLOS SANCIONATORIOS
Teusaquillo	4
Usme	4
Suba	3
Kennedy	3
Fontibón	2
Tunjuelito	2
Rafael Uribe Uribe	1
Puente Aranda	1
La Candelaria	1
Ciudad Bolívar	1
Barrios Unidos	1

Finalmente, debe aclararse que las bases de datos del Eje Disciplinario datan del mes de agosto del 2012, que fue la anualidad en la que se creó la Secretaría Común para Asuntos Disciplinarios.

Atentamente,


MARÍA SHIRLEY CRUZ CAMARGO
 Secretaria Común de Asuntos Disciplinarios

Anexo: cinco (5) archivos adjuntos.

Elaboró: Luz Dávila Pino C. - Secretaria Común de Asuntos Disciplinarios
Revisó y aprobó: María Shirley Cruz Camargo - Secretaria Común de Asuntos Disciplinarios

Al servicio de la ciudad